



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

CAUSA N°104475/2019

Sentencia Definitiva

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los _____, reunida la Sala Segunda de la Excelentísima Cámara Federal de la Seguridad Social para dictar sentencia en estos autos **MELLI HNOS. S.A. (EX MELLI HNOS. CONSTR. CHAQUEÑAS SA) c/ MIN.DE PRODUCCION Y TRABAJO-SEC.GOB.DE TRABAJO Y EMPLEO s/IMPUGNACION DE DEUDA**, se procede a votar en el siguiente orden:

EL DOCTOR JUAN A FANTINI ALBARENQUE DIJO

MELLI HNOS. S.A.(EX MELLI HNOS. CONTRUCCIONES CHAQUEÑAS SA) apela la resolución 2019-26438-APN DRLF#MPYT que desestima el recurso de impugnación interpuesto .contra la Resolución D.R.F. n° 37089/2016, por la que se impone una multa de \$300 por infracción cometida al artículo agregado sin número a continuación del artículo 40 de la ley 11.683(texto ordenado por Decreto 821/98 y sus modificaciones y que oportunamente una vez firme la presente, se comunique al Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL)lo decidido a los fines previstos por la Ley 26940 y su reglamentación..

I.-Cuestiones previas formales

I.a) Cuestión de competencia articulada por la pare actora

Sostiene en tal sentido que el tribunal competente para entender el presente es el Juzgado Federal de Primera Instancia de Resistencia en la Provincia de Chaco y no la Cámara Federal de la Seguridad Social, por inaplicabilidad e inconstitucionalidad de la Resolución 655/2005 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

Esta Cámara ya se ha expedido en torno de la competencia de la misma para entender en las causas como la de autos.

“Dado que el art. 48 de la ley 26.476 avaló las facultades conferidas al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social por los arts. 36 y 37 de la ley 25.877, incluyendo el ejercicio de las atribuciones emergentes de la ley 11.683, del Dec. 801/05 y de la Res. 655/05 del M.T.E. y S.S., la Cámara Federal de la Seguridad Social tiene aptitud jurisdiccional para conocer en una causa donde el organismo reclama el ingreso de las cargas sociales referidas a un supuesto trabajador (cfr. Criterio sostenido por las Fiscalías de Cámara n° 1 y n° 2,



dictámenes Nro. 23.905 del 02.02.09 y 25.626 del 09.03.09, respectivamente). exp. 41185/2009. "ARGENTBIO S.R.L. c/ Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social s/Impugnación de deuda"11/09/0 sent. def. 130042.Cámara Federal de la Seguridad Social. Sala I.) "Dado que el art. 48 de la ley 26.476 avaló las facultad de conferidas al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social por los arts. 36 y 37 de la ley 25.877, incluyendo el ejercicio de las atribuciones emergentes de la ley 11.683; del Dec. 801/05 y de la Res. M.T.E. y S.S. 655/05, la Cámara Federal de la Seguridad Social tiene aptitud jurisdiccional para conocer en el recurso interpuesto contra una resolución que dispuso la aplicación de una multa por infracción cometida al artículo agregado sin número a continuación del art. 40 de la ley 11.683 (exp. 10848/2012. "ARGEN PESCA S.A. c/ Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social s/Impugnación de deuda". 1/06/12sent. def. 146002.Cámara Federal de la Seguridad Social. Sala I).

"A más de las facultades de inspección y determinación de deuda concurrentes entre la A.F.I.P. y el M.T.E. y S.S., la reglamentación a través de normas de diversa categoría en la escala jerárquica (Decreto, Resolución), ha concluido por atribuir una competencia también específica al Ministerio de Trabajo y dependencia delegada, para analizar las impugnaciones y recursos que se deduzcan contra esa actividad, podría decirse, de instrucción y determinación de deuda. Ello aumentó el espectro competencial de la C.F.S.S. al autorizarse similar recurso que el previsto por la ley 18.820 y sus modificatorias, contra las resoluciones de la A.F.I.P.(exp. 7402/2009. "LÁCTEOS DEL SALADO S.R.L. c/ Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social s/Impugnación de deuda". 11/06/09 sent. int. 71901.Cámara Federal de la Seguridad Social. Sala II).

En su memorial, el accionante plantea, la inconstitucionalidad del art. 10 inc. B de la Resolución 655/05. Sin embargo, no cabe recepcionar la queja, atento no reunir los recaudos mínimos para ello.

En efecto, una declaración de tal gravedad amerita necesariamente la demostración, de quien la pretende, de los agravios que le origina en concreto esa disposición, resultando insuficientes los meramente conjeturales (En similar sentido, CSJN MOÑO AZUL SA. SENT. DEL 15 4 93, CN CONT. ADM.FED. SAFRA C.I.F. c/ A.N.A. Sent. del 7.5.96, entre otros). Tales exigencias no se encuentran cumplidas en la presentación en cuestión.

En reiteradas ocasiones el más Alto Tribunal de la Nación señaló que "la declaración de inconstitucionalidad de una ley o de alguna de sus partes es un acto





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

de suma gravedad institucional que debe ser considerada como ultima ratio del orden jurídico" (CSJN Fallos 288: 325; 290:83; 294: 383; 312: 1437 y 1681; "Rallin Hugo Félix y otros" Sent. del 7 5 91; "IACHEMET, María c/Armada Argentina" Sent. del 29 4 93; "Conti Juan c/Ford Motor Arg. S.A." Sent. del 29 3 88; entre otros

I,b).- Inapelabilidad en razón del monto

En la contestación al traslado del recurso, alega el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que resultando la multa impuesta por el importe de pesos trescientos, es inapelable en razón del monto, conforme lo dispuesto por el artículo 242 del CPCCN.

Se trata en el caso de una sanción y como tal reviste carácter punitivo.

Una resolución causa gravamen cuando impide o tiene por extinguido el ejercicio de una facultad o de un derecho procesal, impone el cumplimiento de un deber o aplica una sanción. (Cfr. Palacio, "Derecho Procesal Civil", T.V, Ed. Abeledo - Perrot-1993, pág. 13). Ello así, no puede invocarse una disposición procesal, para coartar la revisión judicial de una resolución que impone una sanción, no obstante el monto involucrado.

Pon ende, la referida disposición no puede ser alegada para impedir que la Cámara discuta la sanción impuesta administrativamente, pues ello violaría el principio de separación de poderes y el derecho de defensa en juicio del contribuyente sancionado. Máxime si la intervención judicial de este Tribunal, es originaria y no existe posibilidad de una intervención de grado que garantice, por lo menos, la consideración judicial del derecho que se dice lesionado.

En razón de lo expuesto, se desestima la oposición formulada.

I.c) Depósito previo

La actora ha efectivizado el depósito previo requerido por el art. 15 de la ley 18820, por lo que se analizara el recurso impetrado.

2) Cuestión de fondo.

Cuestiona la recurrente, la sanción impuesta y más específicamente, su inclusión en el REPSAL dispuesta por el artículo 2 de la Resolución D.R.F. nº 37089/2016, a los fines previstos por la ley 26.940.



MELLI HNOS. S.A entiende. que se trata de una sanción adicional al propio ordenamiento sancionatorio que a su vez no surge en forma explícita de normas sancionatorias positivas (art. 40 ley 11683) ni cuenta con recursos específicos que permitan ejercer el legítimo derecho de defensa por dicha inclusión ,violando el derecho de defensa y el debido proceso adjetivo. Cuestiona la constitucionalidad de la ley 26940.Considera que se viola el principio de “nom bis in idem”,

Refiere que la multa debe ser condonada conforme la ley 27260, art, 56 tercer y sexto párrafo, La liberación de multas y sanciones importara asimismo y de corresponder la baja de la inscripción del contribuyente del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) contemplado en la ley 26.940.Plantea la nulidad de las actas de constatación

La actora ha reconocido el incumplimiento que motivó la multa. En ese orden, en su memorial recursivo señala que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación realizó un relevamiento en una obra que llevaba adelante su parte donde se encontraban realizando tareas de albañilería numerosas personas y solamente una persona que ese día ingresaba a la empresa fue detectada el cual fue debidamente regularizado pagándose la multa impuesta

La Resolución General 1891/05 establece el Sistema Único de la Seguridad Social (SUSS). Empleadores. Trabajadores en relación de dependencia. "Clave de Alta Temprana".

En el artículo 3º se indican los plazos en que debe procederse a la comunicación del alta Ello así, establece “- La comunicación del alta en el "Registro" deberá efectuarse dentro de los plazos que se indican a continuación, según se trate de un: a) Trabajador que se contrate para realizar tareas inherentes a alguna de las actividades que se detallan en el Anexo I de la presente: hasta el momento de comienzo efectivo de las tareas, sin distinción de la modalidad de contratación. b) Trabajador que no se encuentra comprendido en el inciso precedente de este artículo: hasta el día inmediato anterior, inclusive, al de comienzo efectivo de las tareas, cualquiera fuera la modalidad de contratación celebrada.

La infracción de carácter formal se consuma por el incumplimiento del deber impuesto por la normativa, encontrándose previsto en la misma la reducción de la sanción según la fecha en que se regulariza la irregularidad detectada.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

En el caso de autos, el acta de relevamiento tuvo lugar el 11 de septiembre de 2015, siendo relevado el Sr. Carlos Mathias .Gómez Aresti quien declara como fecha de ingreso el 11/9/2015. Si bien se formaliza el Alta del Trabajador, declarando esa fecha de inicio, esta se efectivizó el 12 /9/2015 , es decir con posterioridad al acta de inspección. Por tanto, habiéndose regularizado la infracción en forma previa a la audiencia de descargo, es pasible de sanción, con la reducción prevista en la norma, por lo que se fija la multa en \$300

En el caso de multas previsionales, la constatación de la infracción genera la consiguiente responsabilidad y sanción al infractor, salvo que éste invoque y demuestre la existencia de alguna circunstancia exculpatoria válida. La aplicación de las sanciones constituye, en definitiva, el ejercicio del poder propio de la Administración, cuya razonabilidad cae bajo el control del Poder Judicial para evitar que la discrecionalidad se convierta en arbitrariedad (en sent. sim. C.Nac. Cont. Adm. Fed. Sala II, Cargill SA c/ IASCAV Resol. N° 69/96, Causa 18.884/96, 96/11/14).

La actora, como se ha dicho, no desconoce la irregularidad luego subsanada respecto del trabajador relevado. Las constancias documentales arrimadas también lo corroboran. Por ello no existe mérito para declarar nulidad de los actuados, pues no se demuestra que se haya privado al administrado de su derecho de defensa, antes bien ha podido formular su descargo y presentar los elementos probatorios que hacían al derecho invocado.

Así lo señalado cabe abocarse al agravio en torno a la inscripción en el REPSAL que se dispone administrativamente, y cuestiona la actora.

Es importante la registración laboral de los trabajadores, en tiempo y forma., ello así se han creado medidas tendientes a fomentar dicha registración en debido tiempo y forma y desalentar los incumplimientos o irregularidades que se detectan al respecto.

La Ley 26.940 de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral incluye dos herramientas concretas para estas finalidades: El Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) y los regímenes de promoción del empleo registrado

El Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) es un registro creado en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Fecha de firma: 02/08/2022

Firmado por: NORA CARMEN DORADO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI, SECRETARIA DE CAMARA

Firmado por: JUAN A FANTINI ALBARENQUE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: WALTER FABIAN CARNOTA, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE



#34401601#306536656#20220523112703265

(MTEySS), en el que se incluyen y publican las sanciones firmes aplicadas por el MTEySS, la AFIP, las autoridades provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA) y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT)

El listado se actualiza diariamente. Se incluye a los empleadores que al día de consulta presentan sanciones firmes originadas por infracciones no regularizadas o que, si bien si fueron regularizadas, permanecen en el Registro por un período que varía entre 30 días y tres años según la infracción, el momento en que se regulariza, el pago de la multa y la fecha de publicación.

Los organismos que tienen a su cargo el ingreso de datos deben dar la baja cuando se cumplan los requisitos exigidos por la Ley.

El artículo 2° determina que sanciones ameritan la inclusión en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL):a) Las impuestas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social por falta de inscripción del empleador en los términos del artículo 12 de la ley 24.241 y sus modificatorias; b) Las impuestas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social por falta de registración de los trabajadores en los términos del artículo 7° de la ley 24.013 y del inciso g) artículo 40 de la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificatorias; (Inciso sustituido por art. 246 de la Ley N° 27.430 B.O. 29/12/2017, Vigencia: el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial y surtirán efecto de conformidad con lo previsto en cada uno de los Títulos que la componen. Ver art. 247 de la Ley de referencia) c) Las impuestas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social por obstrucción a la labor de la Inspección del Trabajo prevista en el artículo 8° del Anexo II del Pacto Federal del Trabajo, ratificado por la ley 25.212;d) Las impuestas por la Administración Federal de Ingresos Públicos en los términos de los apartados a) y b) del inciso 1° del artículo 15 de la ley 17.250, y las derivadas de los incumplimientos a la debida registración de los trabajadores previstas en el artículo 40 de la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificatorias; (Inciso sustituido por art. 246 de la Ley N° 27.430 B.O. 29/12/2017, Vigencia: el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial y surtirán efecto de conformidad con lo previsto en cada uno de los Títulos que la componen. Ver art. 247 de la Ley de referencia) e) Las impuestas por las autoridades provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por incumplimiento a lo previsto en el artículo 7° de la ley 24.013;f) Las impuestas por las autoridades laborales provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) por





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

obstrucción a la labor de la inspección prevista en el artículo 8° del Anexo II del Pacto Federal del Trabajo, ratificado por la ley 25.212; g) Las impuestas en el marco de las leyes 25.191 y 26.727 por el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA) con motivo de la falta de registración de empleadores o trabajadores; h) Las sentencias firmes o ejecutoriadas por las que se estableciere que el actor es un trabajador dependiente con relación laboral desconocida por el empleador, o con una fecha de ingreso que difiera de la alegada en su inscripción, que los secretarios de los juzgados de la Justicia Nacional del Trabajo deban remitir a la Administración Federal de Ingresos Públicos, según lo establecido en el artículo 132 de la Ley 18.345 (t.o. por decreto 106/98).

En todos aquellos supuestos en que el empleador regularice su inscripción o la relación de trabajo -en caso de corresponder-, y pague las multas y sus accesorios, será incluido en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) hasta la fecha en que haya pagado la multa y/o regularizado, y treinta (30) días corridos más a contar desde la última obligación de las mencionadas que se encontrare cumplimentada, en los supuestos que hubieran sido sancionados por: 1. Violación a lo establecido en los apartados a) o b) del inciso 1 del artículo 15 de la ley 17.250.2. Falta de inscripción como empleador o por ocupación de trabajadores mediante una relación o contrato de trabajo no registrado o deficientemente registrado, respectivamente, e incumplimiento de las obligaciones contenidas en el artículo agregado sin número a continuación del artículo 40 de la ley 11.683 (t.o. 1998) y sus modificaciones. 3. Violación a lo establecido por el artículo 15 de la ley 25.191 y su modificatoria.4. Obstrucción a la labor de la inspección del trabajo prevista en el artículo 8° del Anexo II del Pacto Federal del Trabajo, impuestas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. 5. Incumplimiento a lo previsto en el artículo 7° de la ley 24.013 y las sanciones hubieran sido impuestas por las autoridades provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (Artículo sustituido por art. 54 de la Ley N° 27.444 B.O. 18/6/2018)(art.9) En el caso de sentencias condenatorias por violaciones a las leyes 26.390, 26.847 y 26.364, los infractores permanecerán en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) por el plazo de ciento ochenta (180) días contados desde el cumplimiento de la condena penal. En el caso de las sentencias contempladas en el inciso h) del artículo 2° de la presente, los empleadores permanecerán en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) por el plazo de ciento ochenta (180) días, contados desde su inclusión en el mencionado Registro. (art. 11)

Fecha de firma: 02/08/2022

Firmado por: NORA CARMEN DORADO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI, SECRETARIA DE CAMARA

Firmado por: JUAN A FANTINI ALBARENQUE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: WALTER FABIAN CARNOTA, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE



#34401601#306536656#20220523112703265

La publicación de la sanción en el REPSAL implicará para los empleadores sancionados, mientras permanezcan en el Registro, la imposibilidad de: acceder a los programas, acciones asistenciales o de fomento, beneficios o subsidios administrados, implementados o financiados por el Estado nacional, acceder a líneas de crédito otorgadas por las instituciones bancarias públicas, celebrar contratos de compraventa, suministros, servicios, locaciones, consultoría, alquileres con opción a compra, permutas, concesiones de uso de los bienes del dominio público y privado del Estado nacional, que celebren las jurisdicciones y entidades comprendidas en su ámbito de aplicación, participar en concesiones de obras públicas, concesiones de servicios públicos y licencias, o acceder a los beneficios económicos de promoción de las contrataciones previstos en la Ley N° 26.940.

Si el infractor reincidiera en la misma infracción que produjera su inclusión en el Registro en un lapso de tres (3) años será excluido de pleno derecho del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes en el caso de los monotributistas o se impedirá que el empleador infractor deduzca en el impuesto a las ganancias los gastos inherentes al personal -empleados, dependientes u obreros-, de acuerdo con lo previsto por el artículo 87, incisos a) y g) de la ley del referido tributo.

La permanencia en el mencionado Registro no es indefinida y será dada de baja en los términos que fija la ley. Puede ser dispuesta de oficio o a pedido de parte, previa acreditación de que se cumplen los requisitos exigidos por la norma.

La inscripción en el registro no viola el principio de “non bis in idem” ya que se trata de una medida accesorio a la multa que se impone ante las irregularidades o incumplimientos descriptos en la norma, cuya finalidad, como se ha dicho, es la correcta registración de los trabajadores y si bien son gravosas las consecuencias que acarrea la inscripción, no pueden ser consideraras arbitrarias o ilegítimas, en tanto no se demuestre en cada caso concreto que es irrazonable esta accesorio en relación con la falta cometida y el perjuicio concreto ocasionado..

La irregularidad en el caso de autos, si bien fue subsanada, existió y ameritó la sanción de multa reducida, tema ya analizado, con lo que a priori, es procedente la inscripción dispuesta.

Ahora bien, refiere el apelante lo dispuesto en la ley 27.260 art. 56 en cuanto a la condonación de las multas y la baja de la inscripción del contribuyente en el REPSAL, en el caso de liberación de las multas y sanciones.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

El artículo en cuestión en su primer párrafo señala: “El beneficio de liberación de multas y demás sanciones correspondientes a infracciones formales cometidas hasta el 31 de mayo de 2016, que no se encuentren firmes ni abonadas, operará cuando con anterioridad a la fecha en que finalice el plazo para el acogimiento al presente régimen, se haya cumplido o se cumpla la respectiva obligación formal

En autos la multa ha sido abonada por el contribuyente, por lo que es abstracto analizar la condonación de la misma

Sin perjuicio de ello, este artículo en el último párrafo establece: “La liberación de multas y sanciones importará, asimismo y de corresponder la baja de la inscripción del contribuyente del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) contemplado en la ley 26.940”

.Si bien, como queda expuesto, no es viable la condonación de la multa, se estima que atento las constancias de autos, la inscripción en el REPSAL, colocaría al contribuyente que ha pagado la multa, en una situación más gravosa de aquel al que se le condona la sanción aplicada, máxime si la obligación principal se encuentra cumplida-

Ello así, aun cuando no se considera inconstitucional la ley 26.940, dentro de los parámetros referidos, lo cierto, es que considero que en este acápite cabe revocar la comunicación de inscripción de la actora en el REPSAL, so pena de incurrir en un trato arbitrario que no es el querido por la ley. En el caso concreto de autos se encuentran razones suficientes para apartarse de su aplicación mecánica y automática, ya que la sanción aparece como excesiva y desproporcionada frente al monto y la conducta adoptada.

Por lo expuesto propicio: Revocar con el alcance señalado, la resolución apelada. Atento el modo como se resuelve las costas se imponen en el orden causado. Regular los honorarios de la dirección letrada de la parte actora en tres UMA equivalente a \$27.003, veintisiete mil tres pesos (conf. Ac.12/.2022, Conf. Doctrina art. 1255CCyCN y lo establecido por el Alto Tribunal en Establecimiento Las Marías S.A.C.I.F.A. c/Misiones, Provincia de s/ acción, declarativa. Sent. Del 4 de septiembre de 2018). Importes al que se adicionará el IVA en caso de corresponder. (cfr. Excma. C.S.J.N. en el fallo, “Compañía General de Combustibles S.A. s/ recurso de apelación “ sent. Del 16.06.93,Fallos 316,1533)

Fecha de firma: 02/08/2022

Firmado por: NORA CARMEN DORADO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI, SECRETARIA DE CAMARA

Firmado por: JUAN A FANTINI ALBARENQUE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: WALTER FABIAN CARNOTA, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE



#34401601#306536656#20220523112703265

LOS DOCTORES WALTER F.CARNOTA Y NORA CARMEN DORADO DIJERON

Adherimos al voto del Dr. Fantini Albarenque

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, el Tribunal RESUELVE:
Revocar con el alcance señalado, la resolución apelada. Atento el modo como se resuelve las costas se imponen en el orden causado. Regular los honorarios de la dirección letrada de la parte actora en tres UMA equivalente a \$27.003, veintisiete mil tres pesos (conf. Ac.12/.2022 conf. Doctrina art. 1255CCyCN y lo establecido por el Alto Tribunal en Establecimiento Las Marías S.A.C.I.F.A. c/Misiones, Provincia de s/ acción, declarativa. Sent. Del 4 de septiembre de 2018). Importes al que se adicionará el IVA en caso de corresponder. (cfr. Excma. C.S.J.N. en el fallo, “Compañía General de Combustibles S.A. s/ recurso de apelación “ sent. Del 16.06.93, Fallos 316,1533)

Regístrese. Protocolícese. Notifíquese y, oportunamente, devuélvase.

WALTER F. CARNOTA
Juez de Cámara
(Subrogante)

JUAN A. FANTINI ALBARENQUE
Juez de Cámara

NORA CARMEN DORADO
Juez de Cámara

ANTE MÍ:
AMANDA LUCÍA PAWLOWSKI
Secretaria de Cámara

